

## RESOLUCION N. 03325

### “POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009 y en especial, las facultades delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

Que mediante quejas radicadas 19657 y 20475 del 2 y 7 de agosto de 2000, la Dirección de control ambiental del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente —DAMA—, en adelante el Departamento, tuvo noticia de la tala de aboles sin la autorización de la autoridad ambiental en el Conjunto Residencial Ayacucho II, ubicado en la Carrera 83 No. 24-05 Sur de la ciudad de Bogotá D.C, en adelante el Conjunto Residencial.

Que la Subdirección de Calidad Ambiental – Unidad de Seguimiento y Monitoreo Forestal del Departamento, el día 12 de agosto de 2000, en virtud de las citadas quejas realizó visita técnica a las zonas verdes al interior del Conjunto Residencial, de la cual se emitió Concepto Técnico 10689 de 26 de septiembre de 2000.

Que conforme a las observaciones del Concepto Técnico 10689 de 26 de septiembre de 2000, en el momento de la visita se corroboró la tala de quince (15) árboles sin autorización por parte del Departamento; conducta presuntamente ejecutada por **CLARA CECILIA BEDOYA DE FERNÁNDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No.35.461.686, en calidad de Administradora, quien realizaría la tala de diez (10) árboles, el señor **ARGEMIRO URREGO DIAZ**, identificado con cedula de ciudadanía 2.896.575, quien realizaría la tala de un (1) árbol y **GREGORIO URREGO DIAZ**, identificado con la cédula de ciudadanía 5.813.673, quien realizaría la tala de cuatro (4) árboles.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, se comunicó la apertura de investigación, por los citados hechos, mediante aviso en el Boletín Ambiental No. 35 de noviembre de 2000.

Que el Departamento mediante Auto 1135 del 21 de diciembre de 2000, formuló cargos a la señora **CLARA CECILIA BEDOYA DE FERNÁNDEZ** por la tala de diez (10) árboles localizados en la zona verde del Conjunto Residencial Ayacucho II, en razón de la vulneración de lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto 1791 de 1996, actualmente compilado en el Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y derogados por este. Acto Administrativo notificado el 5 de enero de 2001.

Que la señora **CLARA CECILIA BEDOYA DE FERNÁNDEZ**, mediante comunicación con radicado 2001ER1963 del 19 de enero de 2001, presentó escrito de descargos arguyendo que por motivos de utilidad pública se había realizado la tala, ya que dichos árboles presentaban mala ubicación privando a los apartamentos de los dos primeros pisos de la posibilidad de disfrutar la luz natural y adicionalmente los árboles crecían tanto que alcanzaban a tocar las cuerdas de la luz y el cableado telefónico, poniendo en riesgo la seguridad de los residentes que por último, los árboles talados fueron reemplazados por especies nativas más fáciles de cuidar.

Que el Departamento mediante Resolución 321 de 2 de mayo de 2001, declaró a la señora **CLARA CECILIA BEDOYA DE FERNÁNDEZ**, responsable de la tala de diez (10) árboles del Conjunto Residencial imponiéndole multa de dos salarios mínimos, legales, mensuales vigentes y una compensación de entregar de ciento veinticuatro (124) árboles al Jardín Botánico. Acto administrativo notificado personalmente el 5 de julio de 2002.

Que la señora **CLARA CECILIA BEDOYA DE FERNÁNDEZ**, mediante comunicación radicada 2002ER25496 el 12 de julio de 2002, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 321 de 2 de mayo de 2001, arguyendo los mismos argumentos presentados en los descargos, entre otros.

Que mediante Auto 1117 de 9 de octubre de 2002, formuló cargos al señor **ARGEMIRO URREGO DIAZ**, identificado con cedula de ciudadanía 2.896.575, por la tala de un (1) árbol) sin la autorización de la autoridad competente, infringiendo el artículo 57 del Decreto 1791 de 1996, árbol ubicado en la zona verde del Conjunto Residencial Ayacucho II de la Carrera 83 No. 24-05 Sur de Bogotá D.C., conducta que vulnera el artículo 57 del Decreto 1791 de 1996. Acto Administrativo que fue notificado personalmente el día 30 de octubre de 2002, quedando ejecutoriado el día 30 de octubre de 2002.

Que igualmente el Departamento, mediante Auto 1118 de 9 de octubre de 2000, formuló cargos al señor **GREGORIO URREGO DIAZ**, identificado con cedula de ciudadanía 5. 813.673 por la tala de cuatro (4) árboles, sin la autorización de la autoridad competente, ubicados en la zona verde del Conjunto Residencial Ayacucho II de la Carrera 83 No. 24-05 Sur de Bogotá, conducta que vulnera el artículo 57 del Decreto 1791 de 1996. Acto Administrativo que fue notificado

personalmente el día 22 de noviembre de 2002. el cual quedó ejecutoriado el día 22 de noviembre de 2002.

Que el Departamento mediante Resolución 1400 de 15 de octubre de 2002, revocó la Resolución 321 del 2 de mayo de 2001, por la cual se declaró responsable de la tala de diez (10) árboles ubicados en la zona verde del Conjunto Residencial Ayacucho II, a la señora **CLARA CECILIA BEDOYA DE FERNÁNDEZ**, por cuanto realizada la evaluación del material probatorio, se observó que no se habían formulado cargos a los señores **ARGEMIRO URREGO DIAZ y GREGORIO URREGO DIAZ**, quienes también infringieron la norma ambiental y en las mismas circunstancias y adicionalmente no había equivalencia en la sanción. Acto administrativo notificado personalmente el 21 de noviembre de 2002.

Que estas corresponden a las últimas actuaciones por parte de la Autoridad evidenciadas en el expediente.

## II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Previo a resolver el presente asunto, conviene hacer las siguientes precisiones de orden jurídico:

Sea lo primero señalar que el hecho objeto de investigación contra los señores: **CLARA CECILIA BEDOYA DE FERNÁNDEZ, ARGEMIRO URREGO DIAZ y GREGORIO URREGO DIAZ**, se estableció el día 12 de agosto de 2000, mediante visita técnica realizada por la Subdirección de Calidad Ambiental y Monitoreo Forestal del Departamento, lo que dio origen a la apertura de investigación comunicada mediante aviso en el Boletín Ambiental No. 35 de noviembre de 2000, esto es con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por lo tanto resulta procedente señalar que la normativa aplicable al presente caso es la prevista en el Decreto 01 de 1984, la Ley 99 de 1993 y Decreto 1594 de 1984 para proceso sancionatorio, en aplicación del principio de legalidad, vigencia de la ley en el tiempo, debido proceso y régimen de transición previsto en la Ley 1333 de 2009 -Régimen Sancionatorio Ambiental.

En ese orden de ideas el régimen de transición previsto en la Ley 1333 de 2009 -Régimen Sancionatorio Ambiental, dispone:

*“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

En este sentido, en materia procesal y de cara a la transición de procedimientos previstos en el artículo 64 de la ley 1333 de 2009, se advierte que, para el presente caso los actos administrativos de formulación de cargos contra los investigados, tuvieron lugar con antelación

de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, por lo tanto, la investigación debe continuar con el procedimiento dispuesto en el Decreto 1594 de 1984.

En efecto, las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el Legislador establezca una excepción. Al respecto, el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012<sup>1</sup>, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887<sup>2</sup>, dispuso:

*"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.*

*Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones (...)"* (Subrayado y negrillas fuera de texto)

En armonía con lo anterior, debe tenerse presente que la naturaleza del hecho irregular que dio lugar al proceso sancionatorio ambiental, es el punto de referencia y de partida para el cómputo de la caducidad, lo cual significa que, por tratarse de un hecho de ejecución instantánea, la caducidad opera desde el mismo momento de su ocurrencia o desde la fecha en que la autoridad ambiental tuvo conocimiento del suceso, tal y como lo ha reafirmado en múltiples pronunciamientos la doctrina y la jurisprudencia.

Que, así las cosas, se concluye que en el presente caso la Autoridad conoció de la tala de quince (15) árboles llevada a cabo en el Conjunto Residencial Ayacucho II ubicado en la Carrera 83 No. 24-05 Sur de esta ciudad mediante visita técnica llevada a cabo el día 12 de agosto de 2000, momento en el que no se encontraba vigente la Ley 1333 de 2009, cuyo artículo 10 estableció un término de caducidad de 20 años y en su lugar, regía el artículo 38 del **Decreto 01 de 1984**, que fijó el término de caducidad de la facultad sancionatoria en tres (3) años.

En definitiva, al amparo del debido proceso, vigencia de la ley en el tiempo y del principio de legalidad a que se refiere el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que si se trata de un hecho de ejecución instantánea o de ejecución continuada cuyo último acto se haya materializado ANTES del 21 de julio de 2009, el término de caducidad comenzó a correr al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (3 años), como en el sub lite, pues se trata de hechos irregulares acaecidos antes de que entrara en vigencia la caducidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, no siendo viable jurídicamente aplicar en forma retroactiva la caducidad de veinte (20 años) prevista en dicha norma.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que a más de ser la caducidad en términos generales un fenómeno jurídico de carácter procesal, en materia administrativa genera la pérdida de competencia de la Administración para resolver sobre un determinado asunto, de suerte que

<sup>1</sup> Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones

<sup>2</sup> Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887

dar aplicación retroactiva a la caducidad de 20 años prevista en la Ley 1333 de 2009, respecto de situaciones que se consumaron antes de su entrada en vigor, implicaría desconocer la máxima del debido proceso constitucional (Artículo 29 C.N), a cuyo amparo **“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente...”**, y soslayar por completo el principio de legalidad y debido proceso que rige por excelencia las actuaciones administrativas.

Al respecto, es necesario indicar, que la caducidad de la acción reviste carácter de orden público, pues su establecimiento obedece a razones de interés general que imponen la obligación de obtener en tiempos breves la definición de ciertos derechos, lo que le otorga dinámica a la actividad administrativa, al paso que le imprime un importante grado de seguridad jurídica. Ahora bien, en materia sancionatoria, impide toda posibilidad de iniciar o proseguir una determinada actuación, dado que se trata de una institución procesal que ataca el derecho de acción, cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Así entonces, en relación con la posibilidad de dar aplicación retroactiva al término de caducidad de los 20 años previsto en la Ley 1333 de 2009, asunto que encuentra solución en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, y atendiendo las reglas generales de interpretación ante conflictos derivados de la aplicación de la ley procesal en el tiempo; se puede concluir que en el presente caso el término de la caducidad aplicable es el previsto en el artículo 38 del Decreto 01 de 1984.

Que, respecto al fenómeno de la caducidad, la Honorable Corte Constitucional<sup>3</sup>, ha dicho:

*“Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase.*

*En este orden de ideas y entendida la caducidad como un término para realizar, un acto administrativo que ponga fin a la actuación sancionatoria, con el objetivo de no dejar en suspenso por mucho tiempo la ejecución del acto de que se trata; de conformidad con lo antes expuesto se procederá al análisis del fenómeno de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, el cual establece:*

*“... Caducidad respecto de las sanciones. ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”*

Así mismo, el Honorable Consejo de Estado<sup>4</sup> precisó:

<sup>3</sup> Sentencia No. T-433 de fecha 24 de junio de 1992

<sup>4</sup> Providencia del 23 de junio de 2000, Expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo

*“(…) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor.” (…)*

Frente al término establecido en el referido artículo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(…) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración:*

*(…)*

*Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa (…)” (Subrayado fuera de texto).*

Para el caso que nos ocupa, se deduce que el Departamento, disponía de un término de **tres (3) años**, contados a partir de la fecha en que estableció el hecho de la tala de quince (15) árboles llevada a cabo en el Conjunto Residencial Ayacucho II, esto es, **el 12 de agosto de 2000**, día de la visita técnica realizada a la zona verde del mentado Conjunto, por la Subdirección de Calidad Ambiental Unidad de Seguimiento y Monitoreo Forestal del Departamento, para la expedición del Acto Administrativo que resolvería de fondo la Actuación Administrativa frente al proceso sancionatorio, es decir hasta el **12 de agosto de 2003**, trámite que no se surtió, operando de esta manera el fenómeno de la caducidad.

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA–, procederá a declarar la caducidad de la facultad sancionatoria y en consecuencia ordenará el archivo de las diligencias administrativas contenidas en el expediente **SDA 08-2000-2233**.

Por último, la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, artículo 308, dispone:

**“RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA.** El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

*Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.*

*Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.*

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo que concluye mediante el presente acto dio inicio en vigencia del Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, se mantendrá dicho procedimiento hasta el final de la presente actuación administrativa.

### III. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

El artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

De conformidad con lo contemplado en el Numeral 6° del Artículo Segundo de la Resolución 1865 del 6 de julio de 2021, de la Secretaría Distrital de Ambiente, “*Por la cual se reasumen funciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, se delegan funciones en la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones adscritas y se toman otras determinaciones*” corresponde a la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaria “6. *Expedir los actos administrativos que declaran la caducidad administrativa en los procesos sancionatorios*”.

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar la **CADUCIDAD** de la facultad sancionatoria que tiene la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- respecto de los hechos que originaron la apertura de investigación por la tala de quince (15) árboles de diferentes especies que se encontraban ubicados en la carrera 83 No. 24-05 Sur, Conjunto Residencial Ayacucho II de la ciudad de Bogotá D.C., conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el presente acto administrativo a la señora **CLARA CECILIA BEDOYA DE FÉRNANDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No.35.461.686, en calidad d administradora del Conjunto Residencial Ayacucho II, ubicado en la Carrera 83 No. 24-05 Sur de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO TERCERO. Notificar** al señor **ARGEMIRO URREGO DIAZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.896.575, en la Carrera 83 No. 24-05 Sur, Bloque 15, apartamento 303, Conjunto Residencial Ayacucho II, de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTICULO CUARTO. Notificar** al señor **GREGORIO URREGO DIAZ**, identificado con la cédula de ciudadanía 5.813.673, en la Carrera 83 No.24-05 Sur, Bloque 16, apartamento 202, Conjunto Residencial Ayacucho II, en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO QUINTO. Comunicar** la presente Resolución a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario de esta Secretaría, para lo de su competencia.

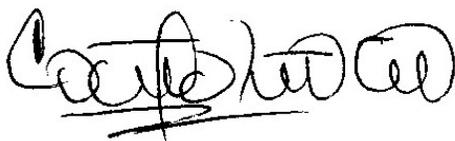
**ARTÍCULO SEXTO. Comunicar** la presente Resolución a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009; para su conocimiento y fines pertinentes.

**ARTÍCULO SÉPTIMO. Publicar** la presente Resolución en el boletín ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO OCTAVO.** Cumplido lo anterior archivar definitivamente las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2000-2233** como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

**ARTÍCULO NOVENO.** Contra la presente resolución procede recurso de reposición el cual se deberá interponer ante la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**



**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR**  
**DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL**

**Elaboró:**

JOHANNA VANESSA GARCIA CASTRILLON      CPS:      CONTRATO 2021-1110      FECHA EJECUCION:      27/09/2021  
DE 2021

**Revisó:**

SANDRA MILENA BETANCOURT GONZALEZ      CPS:      CONTRATO 2021-1145      FECHA EJECUCION:      27/09/2021  
DE 2021

**Aprobó:**

**Firmó:**

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR      CPS:      FUNCIONARIO      FECHA EJECUCION:      27/09/2021